

Señor:

Juez Administrativo del Circuito Oral de Guadalajara de Buga - Reparto
E.S.D.

Referencia: Demanda Contenciosa Administrativa de Medio de Control de Reparación Directa
art. 140 del CPACA.

Demandantes: María Gladis Ospina Villada y Otros.

Demandados: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – representado por la doctora
Cristina Plazas Michelsen - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle del
Cauca – representado por el doctor Jhon Arley Murillo Benítez.

WILLIAM ALEJANDRO APONTE LONDOÑO, mayor de edad y vecino del municipio de Tuluá – Valle del Cauca, identificado con la cédula de ciudadanía número 89.005.695 expedida en Armenia – Quindío, abogado titulado, portador de la tarjeta profesional número 153.143 del Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del poder conferido por los señores María Gladis Ospina Villada, quien actúa en nombre propio y en representación de sus nietos **Jorge Eliecer Idarraga González, Jhon Edwin González Ospina y Mónica Alejandra Arenas González**, y de los señores **Yuri Tatiana Ospina Villada, Juan Sebastián Ospina Villada, Sandra Patricia Marín Ospina y Carlos Arturo Ospina Villada**, mayores de edad y con domicilio y residencia en Tuluá - Valle, por medio del presente escrito presento demanda ordinaria contencioso administrativa de **Medio de Control de Reparación Directa** (art. 140 del CPACA), en contra de **El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – representado legalmente por su Directora General la doctora Cristina Plazas Michelsen y El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle del Cauca, representado legalmente por el Director Regional doctor Jhon Arley Murillo Benítez**, o por quien Los represente o haga sus veces al momento de ser notificados del proceso, demanda que sustento de la siguiente manera:

I. DESIGNACION DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES:

1.1 Parte demandante:

- 1.1.1 La señora **María Gladis Ospina Villada**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.884.298 expedida en Tuluá, quien actúa en nombre propio y en representación de los menores de edad **Jorge Eliecer Idarraga González, Jhon Edwin González Ospina y Mónica Alejandra Arenas González**.
- 1.1.2 El señor **Juan Sebastián Ospina Villada**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.116.270.395 expedida en Tuluá.
- 1.1.3 La señora **Yuri Tatiana Ospina Villada**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.116.270.394 expedida en Tuluá.
- 1.1.4 La señora **Sandra Patricia Marín Ospina**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.760.662 expedida en Tuluá.

1.1.5 El señor **Carlos Arturo Ospina Villada**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.116.237.552 expedida en Tuluá.

1.2. Apoderado de la parte demandante:

El suscrito, **William Alejandro Aponte Londoño**, mayor de edad domiciliado y residente en el municipio de Tuluá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 89.005.695 expedida en Armenia, abogado titulado y en ejercicio portador de la tarjeta profesional No. 153.143 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuó en el presente proceso como apoderado de la parte demandante, según poder debidamente conferido y cuya personería solicito me sea reconocida por su despacho.

1.3. Parte Demandada:

1.3.1. **Establecimiento Publico Instituto Colombiano de Bienestar Familiar**, Entidad de Derecho público representada para efectos jurídicos por su Directora General **Cristina Plazas Michelsen**, o quien lo reemplace o hiciere sus veces al momento de la notificación, a quien se le notificara el auto admisorio de la demanda en los términos de la ley 1437 de 2011, a fin de que comparezca como parte demandada.

1.3.2. **Establecimiento Publico Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle del Cauca**, Entidad de Derecho público representada para efectos jurídicos por su Director Regional **Jhon Arley Murillo Benitez**, o quien lo reemplace o hiciere sus veces al momento de la notificación, a quien se le notificara el auto admisorio de la demanda en los términos de la ley 1437 de 2011, a fin de que comparezca como parte demandada.

Los demás datos de la demanda corresponden a este con las formalidades indicadas en el artículo 175 del CPACA (ley 1437 de 2011).

1.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado:

Solicito señor juez que en cumplimiento a la ley se le corra traslado de la demanda a la agencia nacional de defensa jurídica del estado.

1.5. En interés de legalidad:

Actuar como parte el **MINISTERIO PUBLICO**, representado por el señor Procurador Judicial ante su despacho, a fin de que intervenga en el proceso en interés del orden jurídico; funcionario a quien se le deberán notificar todas las providencias que emanen del presente proceso. Artículo 303 del CPACA (Ley 1437 de 2011).

II. PRETENSIONES DE LA DEMANDA:

Con fundamento en los hechos que expondré y previos los tramites del proceso contencioso administrativo, consagrado en el capítulo V, artículos 179 y s.s. del CPACA, respetuosamente promuevo ante su despacho Medio de Control de Reparación Directa, consagrado en el artículo 140 del CPACA, para lo cual con todo comedimiento me permito solicitar se hagan las siguientes declaraciones y condenas.

Primera. Declarar que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle del Cauca es administrativamente responsable de todos los perjuicios material y moral causados al menor de edad **Jorge Eliecer Idarraga González**, con motivo del daño causado con la acción u omisión que derivo la permanencia injustificada del menor en un hogar sustituto por espacio de ocho (8) años, ocho (8) meses y veinte (20) días.

Segunda. Declarar que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle del Cauca es administrativamente responsable de todos los perjuicios materiales y morales causados a los menores **Jhon Edwin González Ospina** y **Mónica Alejandra Arenas González** de 13 y 11 años respectivamente, hermanos de **Jorge Eliecer Idarraga González**, quienes son representados por su abuela **María Gladis Ospina Villada**. Y quienes deben ser indemnizados con motivo del daño causado con la acción u omisión que derivo la permanencia injustificada de su hermano en un hogar sustituto por espacio de ocho (8) años, ocho (8) meses y veinte (20) días.

Tercera. Declarar que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle del Cauca es administrativamente responsable de todos los perjuicios de orden material y moral causados a la señora **María Gladis Ospina Villada**, quien deberá ser indemnizada con motivo del daño causado con la acción u omisión que derivo la permanencia injustificada de su nieto **Jorge Eliecer Idarraga González**, en un hogar sustituto del ICBF por espacio de ocho (8) años, ocho (8) meses y veinte (20) días.

Cuarta. Declarar que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle del Cauca es administrativamente responsable de todos los perjuicios de orden material y moral causados a los señores **Juan Sebastián Ospina Villada**, **Yuri Tatiana Ospina Villada**, **Sandra Patricia Marín Ospina** y **Carlos Arturo Ospina Villada**, quienes deberán ser indemnizados con motivo del daño causado con la acción u omisión que derivo la permanencia injustificada de su sobrino **Jorge Eliecer Idarraga González**, en un hogar sustituto del ICBF por espacio de ocho (8) años, ocho (8) meses y veinte (20) días.

Quinta. Condenar, en consecuencia, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle del Cauca a pagar a los actores como reparación del daño ocasionado, o a quien represente legalmente sus derechos, todos los perjuicios de orden material y moral, subjetivos y objetivados, actuales y futuros, los cuales se estiman como mínimo en la suma de **setecientos setenta y seis millones doscientos tres mil doscientos pesos (\$776.203.200.00) equivalentes a mil doscientos cuatro SMLMV 2015**.

Sexta.- Que al momento de dictar la sentencia se ordene Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle del Cauca que la liquidación de las anteriores condenas deberá efectuarse mediante sumas liquidas de moneda del curso legal en Colombia, y se ajustaran dichas monedas tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor, conforme a lo dispuesto en el artículo 187 inciso final del CPACA. Ley 1437 de 2011.

Séptima.- Que se ordene al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle del Cauca, que al momento de cumplir con la sentencia se de aplicación a los artículos 189, 192 y 195 del CPACA. Ley 1437 de 2011.

Octava.- Que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada, de conformidad con lo establecido en el artículo del CPACA. Ley 1437 de 2011.

III. HECHOS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO PARA LA PETICIÓN:

Primero.- La trabajadora social del Hospital Universitario del Valle, el 21 de octubre de 2005, puso a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar centro zonal ladera de la ciudad de Santiago de Cali, el niño **Jorge Eliecer Idarraga González**, después de que fuera abandonado por su progenitora **Ninfa Tiberia González** en las instalaciones del centro hospitalario.

Segundo.- Al interior del centro zonal se realizaron las actuaciones correspondientes y por reparto le correspondió conocer del caso a la defensora Tercera de Familia, quien el día 21 de octubre de 2005 avocó el conocimiento de las diligencias de protección al menor, ordenando de inmediato la ubicación del menor en hogar sustituto.

Tercero.- Una vez surtido el trámite administrativo correspondiente la Defensoría de Familia del centro zonal Ladera del ICBF regional Valle, profirió la resolución No. 256 del 7 de diciembre de 2007 (dos años y dos meses aproximadamente), mediante la cual declaró que el niño **Jorge Eliecer Idarraga González** se encontraba en situación de abandono y ordenando el inicio de los trámites de adopción.

Cuarto.- Como se mencionó previamente la madre del menor **Ninfa Tiberia Ospina**, fue quien lo dejó abandonado en el hospital universitario, tampoco se hizo presente en el trámite administrativo y nunca se le notificó de la resolución en comento, pues no había información de ella para poder surtir la notificación personal, y al día de hoy se desconoce su paradero.

Quinto.- Pero quienes sí estaban pendientes de la situación del menor fueron su padre **José Alcides Idarraga** y su abuela materna **María Gladis Ospina Villada**, a quienes se les notificó la resolución el día 10 de octubre de 2008 (10 meses después), quienes además dentro del término legal interpusieron en debida forma el recurso de reposición y de apelación en contra de esa resolución que ordenaba la situación de abandono y el inicio de los trámites de adopción.

Sexto.- El instituto colombiano de bienestar familiar centro zonal Ladera de Cali, a través del defensor de Familia encargado del caso, en vez de resolver el recurso interpuesto profiere la resolución No. 104 del 10 de agosto de 2011 (2 años y 10 meses después de interpuesto el recurso) por medio de la cual **NUEVAMENTE** declara el niño en situación de abandono y de adoptabilidad.

Séptimo.- Al observar el error cometido profieren la resolución No. 014 del 6 de febrero de 2012 por la cual revocan la resolución 104 de agosto de 2011 (6 meses después) al conocer que la situación del menor había sido previamente definida en resolución No. 265 de diciembre de 2007.

Octavo.- El 1 de marzo de 2012 la defensora del centro zonal centro del ICBF Regional Valle del Cauca, profiere la resolución No. 022 por la cual resuelve **NO REPONER** la resolución No. 265 de diciembre de 2007 y por ende concediendo el recurso de apelación interpuesto ante el Director Regional. (Tres años y tres meses después de interpuesto el recurso).

Noveno.- El día 25 de julio de 2012 la Directora Regional Encargada del ICBF resuelve el recurso por medio de la resolución No. 2326 en la que confirmó en todas sus partes la resolución No. 022 de marzo de 2012 que negó el recurso de la resolución No. 265 de diciembre de 2007, ordenando con ello remitir el proceso al juez de familia para surtir el trámite de la homologación del fallo, pues se presentó oposición por parte del papa del menor y de la abuela materna.

Decimo.- El proceso fue sometido a reparto y le correspondió el trámite de homologación al juzgado once de familia piloto de oralidad, y el 8 de octubre de 2012 dispuso avocar el conocimiento de las diligencias y corrió traslado a la procuraduría judicial para asuntos de familia.

Décimo Primero.- El despacho previo a tomar una decisión advirtió que la abuela materna señora María Gladis Ospina Villada durante el procedimiento administrativo surtido ante ICBF nunca acreditó ni le fue requerido el documento que acreditara que se trata efectivamente de la señora madre de Ninfa Tiberia y a su vez entonces la abuela del niño, por esa razón ordeno que se allegara ese documento al proceso de homologación de fallo.

Décimo Segundo.- El juez once de familia previo a tomar la decisión de fondo advirtió que el trámite administrativo de restablecimiento de derechos que adelanto el centro zonal ladera del ICBF no cumplió con el termino establecido en el artículo 100 parágrafo segundo del código de infancia y adolescencia vigente para el año 2005, término que es de cuatro (4) meses y en cambio se prolongó de manera injustificada por espacio de siete (7) años.

Décimo Tercero.- Que el recurso interpuesto por mis representados en el año 2008 no fue resuelto dentro de los diez días que ordena el parágrafo del artículo 100 del código de infancia y adolescencia, sino cuatro (4) años después.

Décimo Cuarto.- Manifiesta la juez en su fallo, que la defensora de familia sobrepaso los términos que establece el artículo 100 de la ley de infancia y adolescencia, y que para la fecha en que se resuelven los recursos, el ICBF ya había perdido la competencia para decidir y expedir esos actos administrativos, pues el mismo código de la infancia y la adolescencia dispone que el expediente debía ser enviado al juez de familia para que fuera el, quien continuara con el trámite correspondiente, situación que no se cumplió y que por ende se vulnero el debido proceso de mis representados.

Décimo Quinto.- Finalmente advierte el juez de familia que pese a que se encuentra debidamente documentado en el trámite administrativo que el papá del menor y la abuela materna demostraron total interés en que les fuera entregado el mismo, el ICBF no realizó ningún esfuerzo para intentar un proceso de integración familiar del menor con su abuela materna.

Décimo Sexto.- Menciona la señora juez que la declaración de adoptabilidad de un menor corresponde a una medida extrema o de último recurso, al que solo puede acudir después de agotar los mecanismos de protección del caso, ya que es una decisión que conlleva notables efectos en la vida de las personas, por tanto se debe considerar como el ultimo mecanismo que puede adoptarse entre las distintas opciones que contempla la ley para restablecer derechos de los niños en situaciones de vulnerabilidad, y que no se puede pasar por inadvertido los artículos 53 numeral 3, 56 del código de la infancia y la adolescencia que consagra como medida de protección la ubicación inmediata en medio familiar, lo que no cumplió el ICBF sino que remitió al niño a hogar sustituto sin permitir el acercamiento con su padre y su abuela materna.

Décimo Séptimo.- La decisión del juez de familia fue no homologar la resolución No. 265 del 7 de diciembre de 2007 proferida por el defensor tercero de familia del centro zonal ladera del ICBF Regional Valle, y ordenar el reintegro del menor **Jorge Eliecer Idarraga González** de inmediato al seno del hogar de la abuela biológica, situación por la cual ordeno que el niño debía permanecer por un tiempo prudencial al amparo del ICBF para iniciar el contacto y acercamiento con la familia extensa, ordeno que se les brindará asesoría psicológica, y terapia familiar hasta lograr una reintegración familiar.

Décimo Octavo.- El juez once de familia de Santiago de Cali decide por medio de sentencia No. 009 del 18 de enero de 2013, quedando ejecutoriado el 31 de enero del año 2013, y pese a las órdenes que imparte el juez en su sentencia, el ICBF no realizo las acciones correspondientes al cumplimiento de la sentencia, prolongando los perjuicios ya causados al menor de edad y a su familia, situación por la cual mi representada la señora **María Gladis Ospina Villada**, a través de apoderado judicial interpuso en el mes de noviembre de 2013 (9 meses después del fallo del juez de familia) acción de tutela buscando que a través de un fallo de un juez constitucional se le ordenara al defensor de familia del ICBF cumplir de una vez con la orden judicial y cesar en la vulneración de los derechos a esta familia y en especial al menor de edad.



Décimo Noveno.- La acción de tutela es de conocimiento del juzgado 11 administrativo oral de la ciudad de Cali, le corresponde el radicado No. 2013-00429 y por medio de fallo 169 del 19 de noviembre de 2013 decide NO TUTELAR los derechos invocados por la señora **María Gladis Ospina Villada**, pero insto al ICBF para que le diera celeridad al cumplimiento del fallo del juez de familia.

Vigésimo.- El fallo de tutela fue impugnado dentro del término legal por el apoderado judicial de la señora **María Gladis Ospina Villada** por considerar que no era acorde con la situación planteada por el tutelante, y en segunda instancia de Tutela le corresponde conocer al Honorable Magistrado Dr. **Jhon Erick Chávez Zúñiga** del Tribunal contencioso administrativo del valle del cauca, quien en fallo de febrero de 2014 revoco el fallo del juzgado once administrativo y ordeno que el ICBF debía realizar todas las acciones para el cumplimiento de la sentencia proferida por el juez de familia dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas.

Vigésimo Primero.- El defensor de familia del ICBF pese a tener una orden del juez de familia y un fallo de Tutela que le ordenaba reintegrar el menor de edad a su seno familiar, continuo prolongando la estadia del menor en hogares sustitutos, situación por la que el apoderado de la señora **María Gladis Ospina Villada** se vio en la necesidad de enviar oficios donde requería el cumplimiento del fallo y de la orden de Tutela.

Vigésimo Segundo.- Finalmente la doctora **Mónica María Restrepo Santa** Defensora de Familia del centro zonal Tuluá del ICBF por medio de resolución no. 290 del 11 de 2014, resuelve el restablecimiento de derechos del menor **Jorge Eliecer Idarraga González** ordenando el reintegro familiar, específicamente al lado de su abuela materna señora **María Gladis Ospina Villada** y a quien le confiere la **CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL**.

Vigésimo Tercero.- De igual manera el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de la resolución No. 0021 del 08 de junio de 2009, le confirió **LA CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL** a la señora **María Gladis Ospina Villada** respecto de los menores de edad **Jhon Edwin González Ospina** y **Mónica Alejandra Arenas González**, custodia que se encuentra vigente y no ha sido revocada ni objetada, lo que legitima en la causa a la señora **María Gladis Ospina Villada**, abuela para demandar en representación legal de sus nietos.

Vigésimo Cuarto. Que en virtud del requisito de procedibilidad se radico solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, presentándose la solicitud en fecha 29/01/2015.

Vigésimo Quinto.- Que la diligencia de conciliación fue programada por la señora Procuradora 18 judicial II para asuntos administrativos, doctora **Alexandra Gómez Muñoz**, para el día 24 de marzo de 2015 a las 11:15 AM, diligencia que fue aplazada a solicitud del apoderado judicial de ICBF quien manifestó que el Comité de Conciliación y defensa judicial de la entidad se reunía hasta el día 7 de abril de 2015.

Vigésimo Sexto.- Que el día 14 de abril de 2015 a la 1:30 de la tarde fecha y hora programada para la diligencia, la Procuradora 18 judicial II para asuntos administrativos, doctora **Alexandra Gómez Muñoz**, observo que los documentos aportados por el abogado del ICBF no daba certeza de que la jefe de oficina jurídica tuviese la facultad para otorgar el poder conferido para actuar y representar judicialmente a la entidad, razón por la cual requirió al abogado del ICBF para que aporte los documentos solicitados, y decidió no adelantar la diligencia y reprogramarla para el día 24 de abril de 2015 a las 8:30, se levantó el acta No. 149 de la fecha.

Vigésimo Séptimo. Que el día 24 de abril de 2015 se llevó a cabo la diligencia, en la que acudió el doctor Orlando Rangel, quien presento acta del comité de conciliación y defensa judicial del ICBF de fecha 8 de abril de 2015, por el cual se decide hacer oferta de conciliación pero solo respecto de la señora **María Gladis Ospina Villada**, y de los menores **Jorge Eliecer Idarraga González**, **Jhon Edwin González Ospina** y **Mónica Alejandra Arenas González**, por cuantía de 175 SMLMV; respecto de los señores **Sandra Patricia Marín Ospina**, **Juan Sebastián Ospina Villada**, **Yuri Tatiana Ospina Villada** y **Carlos Arturo Ospina Villada** no hicieron propuesta alguna porque considero el Comité que no está

probado que se les haya causado perjuicio alguno, ni que haya una estrecha relación entre ellos, igual que respecto de los perjuicios fisiológicos considerando que no están demostrados para ninguno de los convocantes.

Vigésimo Octavo. La oferta elevada por parte del ICBF no fue aceptada por la parte, al considerar que es ínfima y que las pretensiones de la demanda son más altas, que es muy baja en relación con las mismas y que al menos han debido ofrecer el 70% del valor de las pretensiones.

Vigésimo Noveno. Como quiera que no se realizó conciliación, la diligencia de declaro fallida por parte de la doctora **Alexandra Gómez Muñoz**, Procuradora 18 judicial II para asuntos administrativos, quien suscribió el acta No. 160 de la fecha y la correspondiente constancia a las partes.

Trigésimo. Que los hechos por los que se demanda sucedieron de manera sucesiva, iniciando desde el 21 de octubre de 2005 hasta el día 11 de junio de 2014, fecha en la que es reintegrado el menor Jorge Eliecer Idarraga González a su familia, según resolución donde resuelve derechos y acta de entrega a la abuela **María Gladis Ospina Villada**, por lo que es a partir del 14 de junio de 2014 la fecha en la que se debe contar la **CADUCIDAD** de la acción, como quiera que la solicitud de conciliación ante la Procuraduría fue radicada el día 29 de enero de 2015, cuando tan solo han transcurrido 7 meses y 28 días (quedan 16 meses y 2 días) y teniendo en cuenta que la constancia de la Procuraduría es de fecha 24 de abril de 2015, el termino para instaurar la demanda se encuentra vigente hasta el 26 de agosto de 2016, fecha en la que se cumplirían los 24 meses para instaurar la demanda, toda vez que el tiempo transcurrido entre el 29 de enero al 24 de abril de 2015 se suspenden los términos de caducidad.

Vigésimo Octavo.- Los señores María Gladis Ospina Villada, Sandra Patricia Marín Ospina, Juan Sebastián Ospina Villada, Yuri Tatiana Ospina Villada y Carlos Arturo Ospina Villada me han conferido poder para presentar la siguiente demanda.

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES:

Fundamento este proceso en los artículos 2, 6, 13, 29, 44 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 104 numeral primero, 140, 155 numeral 6, 156, 157, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166 y s.s. del CPACA Ley 1437 de 2011, artículos 1 al 69 del decreto 2737 de 1989 código del menor, artículos 1 al 16, 50, 51, 52, 53 numeral 3, 56, 79 al 82, 100 párrafo segundo, 108, 123, 205 de la ley 1098 de 2006 ley de infancia y adolescencia, invoco la jurisprudencia del honorable Concejo de Estado y de la Honorable Corte Constitucional para casos semejantes.

Con los actos imputables a la demanda se han violado las siguientes disposiciones de rango constitucional y legal.

Artículo 2. Constitución Política.- Según el precepto consagrado en esa norma, la función del Estado, es ante todo, la de servir a la comunidad asociada en un estado de derecho y velar por la integridad de una perfecta convivencia y disfrute de las condiciones colectivas de vida mediante la utilización de los distintos servicios públicos a cargo del Estado. En consecuencia, el Estado como servidor delegado por el pueblo, está en la obligación de cumplir con sus objetivos, observando al máximo los cuidados y responsabilidades para no lesionar bajo ningún pretexto los derechos de los ciudadanos.

Artículo 6. Constitución Política. Consagra el artículo sexto de la carta política que los servidores públicos son responsables por infringir la constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 13. Constitución Política. Consagra este artículo el principio de protección constitucional reforzada con relación a los niños niñas y adolescentes, pero en especial a los niños, quienes gozan de una protección especial del Estado.

Artículo 29. Constitución Política. Consagra este artículo que el debido proceso se aplicara a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Es claro para todos los ciudadanos que los términos en materia de las diferentes jurisdicciones en ocasiones son difíciles de cumplir, pero como bien lo consagran el artículo 6 y 90 de la constitución política los funcionarios públicos son responsables por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Este caso es muy particular porque un procedimiento, trámite administrativo para el que está facultado el defensor de familia y que no debía durar por más de cuatro (4) meses se prolongó por más de tres años, donde finalmente el defensor de familia aun cuando era consiente que ya no era el competente decide la situación del menor Jorge Eliecer Idarraga, situación que repito resuelve contrariando la ley porque ya no es competente, sino que además la resuelve sin tener en cuenta las peticiones de su abuela materna para que le sea entregado en custodia el menor de edad. Como quiera que resuelve por fuera de termino y sin ser competente, la señora María Gladis Ospina interpone el recurso que le asiste y esta funcionaria de nuevo incumpliendo con su juramento de cumplir y hacer cumplir la ley, demora por más de tres años la solución del recurso, el cual de manera arbitraria resuelve confirmando la decisión y de nuevo pasando por encima de los ruegos de la abuela materna de ser escuchada y atendida como ciudadana objeto de derechos, pero que en realidad los derechos que priman y que más interesan en este caso son los del niño, a quien le asiste el derecho de tener una familia y a no ser separado de ella.

No conforme con lo anterior esta funcionaria cuando va el expediente, la decisión a Homologación del juez de familia, la juez once de familia previo a tomar la decisión de fondo advirtió que el trámite administrativo de restablecimiento de derechos que adelanto el centro zonal ladera del ICBF no cumplió con el termino establecido en el artículo 100 parágrafo segundo del código de infancia y adolescencia vigente para el año 2005, término que es de cuatro (4) meses y en cambio se prolongó de manera injustificada por espacio de siete (7) años.

Que el recurso interpuesto por mis representados en el año 2008 no fue resuelto dentro de los diez días que ordena el parágrafo del artículo 100 del código de infancia y adolescencia, sino cuatro (4) años después.

Manifiesta la juez en su fallo, que la defensora de familia sobrepaso los términos que establece el artículo 100 de la ley de infancia y adolescencia, y que para la fecha en que se resuelven los recursos, el ICBF ya había perdido la competencia para decidir y expedir esos actos administrativos, pues el mismo código de la infancia y la adolescencia dispone que el expediente debía ser enviado al juez de familia para que fuera el, quien continuara con el trámite correspondiente, situación que no se cumplió y que por ende **se vulnero el debido proceso de mis representados**. (subrayado y negrilla nuestra)

Finalmente advierte el juez de familia que pese a que se encuentra debidamente documentado en el trámite administrativo que el papá del menor y la abuela materna demostraron total interés en que les fuera entregado el mismo, el ICBF no realizó ningún esfuerzo para intentar un proceso de integración familiar del menor con su abuela materna.

Menciona la señora juez que la declaración de adoptabilidad de un menor corresponde a una medida extrema o de último recurso, al que solo puede acudir después de agotar los mecanismos de protección del caso, ya que es una decisión que conlleva notables efectos en la vida de las personas, por tanto se debe considerar como el ultimo mecanismo que puede adoptarse entre las distintas opciones que contempla la ley para restablecer derechos de los niños en situaciones de vulnerabilidad, y que no se puede pasar por inadvertido los artículos 53 numeral 3, 56 del código de la infancia y la adolescencia que consagra como medida de protección la ubicación inmediata en medio familiar, lo que no cumplió el ICBF sino que remitió al niño a hogar sustituto y prolongo por más de ocho años su permanencia en esos lugares, sin permitir el acercamiento con su padre y su

abuela materna, privándolo de un derecho de rango constitucional que es el derecho a tener una familia y a no ser separado de ella.

La decisión del juez de familia fue no homologar la resolución No. 265 del 7 de diciembre de 2007 proferida por el defensor tercero de familia del centro zonal ladera del ICBF Regional Valle, y ordenar el reintegro del menor **Jorge Eliecer Idarraga González** de inmediato al seno del hogar de la abuela biológica, situación por la cual ordeno que el niño debía permanecer por un tiempo prudencial al amparo del ICBF para iniciar el contacto y acercamiento con la familia extensa, ordeno que se les brindará asesoría psicológica, y terapia familiar hasta lograr una reintegración familiar.

El juez once de familia de Santiago de Cali decide por medio de sentencia No. 009 del 18 de enero de 2013, quedando ejecutoriado el 31 de enero del año 2013, y pese a las órdenes que imparte el juez en su sentencia, el ICBF no realizó las acciones correspondientes al cumplimiento de la sentencia, prolongando los perjuicios ya causados al menor de edad y a su familia, situación por la cual mi representada la señora **María Gladis Ospina Villada**, a través de apoderado judicial interpuso en el mes de noviembre de 2013 (9 meses después del fallo del juez de familia) acción de tutela buscando que a través de un fallo de un juez constitucional se le ordenara al defensor de familia del ICBF cumplir de una vez con la orden judicial y cesar en la vulneración de los derechos a esta familia y en especial al menor de edad.

La acción de tutela es de conocimiento del juzgado 11 administrativo oral de la ciudad de Cali, le corresponde el radicado No. 2013-00429 y por medio de fallo 169 del 19 de noviembre de 2013 decide **NO TUTELAR** los derechos invocados por la señora **María Gladis Ospina Villada**, pero insto al ICBF para que le diera celeridad al cumplimiento del fallo del juez de familia.

El fallo de tutela fue impugnado dentro del término legal por el apoderado judicial de la señora **María Gladis Ospina Villada** por considerar que no era acorde con la situación planteada por el tutelante, y en segunda instancia de Tutela le corresponde conocer al Honorable Magistrado Dr. **Jhon Erick Chávez Zúñiga** del Tribunal contencioso administrativo del valle del cauca, quien en fallo de febrero de 2014 revoco el fallo del juzgado once administrativo y ordeno que el ICBF debía realizar todas las acciones para el cumplimiento de la sentencia proferida por el juez de familia dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas.

El defensor de familia del ICBF pese a tener una orden del juez de familia y un fallo de Tutela que le ordenaba reintegrar el menor de edad a su seno familiar, continuo prolongando la estadía del menor en hogares sustitutos, situación por la que el apoderado de la señora **María Gladis Ospina Villada** se vio en la necesidad de enviar oficios donde requería el cumplimiento del fallo y de la orden de Tutela.

Finalmente la doctora **Mónica María Restrepo Santa** Defensora de Familia del centro zonal Tuluá del ICBF por medio de resolución no. 290 del 11 de 2014, resuelve el restablecimiento de derechos del menor **Jorge Eliecer Idarraga González** ordenando el reintegro familiar, específicamente al lado de su abuela materna señora **María Gladis Ospina Villada** y a quien le confiere la **CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL**.

En conclusión un trámite administrativo para el que un defensor de familia dispone de cuatro meses y un recurso para que la ley le otorga diez días para resolver se demoraron previa acción de Tutela el tiempo de ocho años y ocho meses más veinte días, será que acaso es necesario más explicaciones para llegar a la conclusión de que en el trámite que adelanto el defensor de familia con respecto del menor Jorge Eliecer Idarraga se dio una clara y flagrante violación al derecho fundamental al debido proceso, y que además con esa violación a este derecho y el no respetar los términos para que se llevase a cabo el proceso por parte del ICBF se le vulneraron unos derechos fundamentales adicionales al niño y a su grupo familiar aquí demandante, que con ese actuar omisivo e irresponsable se le ocasiono un daño y perjuicios a estas personas, daños que deberán ser reparados por vía del medio de control que se invoca.

Artículo 44. Constitución Política. este artículo consagra el principio de interés superior de los niños y niñas y de prevalencia de los derechos de éstos sobre los derechos de los demás la protección especial a los derechos a la integridad física, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación equilibrada, al nombre, a la nacionalidad, a tener una familia y no ser separado de ella, al cuidado y el amor, a la educación y a la cultura, a la recreación y a la libre expresión de su opinión, el deber en cabeza del Estado de protección especial contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos, y la titularidad de protección de los derechos de los niños y niñas del país por parte de la familia, la sociedad y el Estado.

En ese sentido la convención sobre los derechos del niño, adoptada por la asamblea general de las naciones unidas el 20 de noviembre de 1989, y aprobada por el Congreso de Colombia mediante la ley 12 de 1991, trata sobre el reconocimiento de la vulnerabilidad de los niños y sobre sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales como elementos integrantes de un conjunto, los cuales constituyen el mínimo necesario para la supervivencia y el desarrollo de la infancia. Ellos son el derecho a la vida, a la identidad, a una relación armónica con los padres, a la libertad de pensamiento, de expresión y de asociación en cuanto sean posibles, a la participación en la toma de decisiones frente a abusos, circunstancias de desamparo o de conflicto, a un trato especial cuando la condición especial del niño lo requiera, a la vivienda y al abrigo, a la nutrición y a la salud, a la educación, a la recreación y a la cultura dirigidas al desarrollo de la personalidad, de las aptitudes y de la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades.

Dentro de los principios que establece la convención esta que "un niño puede estar adecuadamente alimentado, pero si no se le educa, se le permite el acceso a la cultura, se le ampara de la explotación laboral y de cualquier forma de abuso, no puede decirse que este protegido, pues se trata de derechos que conforman un todo integrado". Así mismo, se reconoce que el niño tiene una serie de necesidades que evolucionan y cambian con la edad, por lo que se trata de equilibrar los deberes de los padres, correlativamente con dichas necesidades.

Artículo 90. Constitución Política. Responsabilidad Patrimonial del Estado. El artículo 90 de la Constitución Política dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta corporación.

La Corte tuvo la oportunidad de analizar el alcance de la anterior disposición constitucional en la sentencia C-333/96 con Ponencia del Magistrado Alejandro Martínez Caballero, señalando:

"Ahora bien, como se ve, el actual mandato constitucional no es solo imperativo – ya que ordena al Estado responder – sino que no establece distinciones según los ámbitos de actuación de las autoridades públicas. En efecto, la norma simplemente establece dos requisitos para que opere la responsabilidad, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública.

... Por ello ha dicho esa misma Corporación (se refiere al Consejo de Estado) que ese artículo 90 "es el tronco en el que se encuentra fundamento la totalidad de la responsabilidad patrimonial del Estado, trátase de la responsabilidad contractual o extracontractual."

De acuerdo con lo anterior, la responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro ordenamiento jurídico tiene como fundamento un principio de garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, consagrado en los artículos 2, 58 y 90 de la Constitución, ampliamente desarrollado por vía jurisprudencial, y se configura por la concurrencia de tres presupuestos fácticos a saber: un daño antijurídico o lesión, una actuación imputable al Estado y una relación de causalidad."

Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.

La responsabilidad del Estado para su concreción requiere de los siguientes requisitos: a) Que se cause un daño; b) Que ese daño sea imputable, por acción u omisión, a una autoridad pública; y c) Que ese daño sea antijurídico.

Primero, el daño, como requisito esencial de toda responsabilidad, es el resultado de la conducta del sujeto responsable hacia una persona, que se debe traducir en un perjuicio patrimonialmente avaluable para el receptor de la acción u omisión estatal.

Segundo, la imputabilidad del daño es la atribución jurídica de reparar un daño causado que reposa en cabeza de un sujeto determinado. La imputación no puede realizarse con base en la sola causación material de daño, sino que debe sustentarse, "previa justificación de su procedencia, en otras razones o títulos jurídicos diferentes, ya sea la propiedad de la cosa que ha producido el daño, la titularidad de la empresa en cuyo seno ha surgido el perjuicio, la dependencia en que respecto del sujeto responsable se encuentra el autor material del hecho lesivo, o cualquier otra".

Y tercero, La antijuridicidad del daño se contrae a que el sujeto que se soporta el daño no tenga el deber jurídico de afrontarlo.

En conclusión, el artículo 90 de la Carta dispone una garantía de las personas en defensa de sus derechos frente al comportamiento estatal.

Entonces, si analizamos los hechos que se cargan a la demandada, se puede ver meridianamente que el instituto colombiano de bienestar familiar es llamado a responder por los perjuicios causados al menor Jorge Eliecer Idarraga y a su grupo familiar, pues esa entidad pública a través de su representante esto es el defensor de familia y los demás funcionarios que tomaron parte en el proceso administrativo de protección al menor, así como quienes les correspondió resolver los recursos interpuestos, deberá responder por la omisión que llevo a que el niño fuera extraído de su grupo familiar, privado de estar con ellos por espacio de ocho años ocho meses y veinte días.

La responsabilidad patrimonial del estado, requiere que se configuren tres aspectos, requisitos, los cuales para este caso son:

- a) **Que se cause un daño:** quedara suficiente probado para el señor juez que al menor Jorge Eliecer Idarraga se le causo un daño al haberle privado de pasar con sus hermanos y familia en general los primeros años de su vida, años que según los especialistas son decisivos en cuanto en estos años es donde se define la personalidad del individuo, aprende valores, disciplina, obtiene el desarrollo de actividades motoras y se aprende determinadas aspectos que forman el carácter del individuo, se le causo un daño a sus hermanos quienes pese a ser menores de edad vieron la situación de tristeza y de angustia con la que crecieron mientras su abuela luchando prácticamente con las uñas, continuaba buscando la manera de tener a su nieto en casa, que se le causo un daño a esa señora, claro que sí, una persona de estirpe humilde a quien el estado en representación del ICBF pisoteo en todos sus derechos, se burló de ella, se sintió manoseada por estos funcionarios quienes en múltiples ocasiones le hicieron perder idas hasta la ciudad de Cali con el anhelo de ver a su nieto y una vez que llegaba allí no le cumplían lo prometido, que el ICBF prolongo en el tiempo esa zozobra y ansiedad de que le fuera resuelta su situación y la de su menor nieto, que se le causo un daño a los señores Yuri Tatiana Ospina Villada, Juan Sebastián Ospina Villada y Sandra Patricia Marin Ospina de 20 y 36 años de edad respectivamente, claro que se les causo un daño, pues estos hermanos tuvieron que crecer viendo como su mamá luchaba contra un gigante Estado – ICBF para que le devolviera su nieto, sobrino de ellos, que siendo unos niños de 11 años para la época y durante ese tiempo que el ICBF prolongo la situación, su mamá debió hacer cualquier cantidad de sacrificios para estar pendiente del caso, y como ellos vieron la congoja en la que se encontraba su madre, así como tener que vivir que se les privara de beneficios y de afecto en algunas ocasiones porque su mama no se encontraba en las mejores condiciones económicas por tener que velar por sus otros nietos y estar al tanto del caso de Jorge Eliecer Idarraga.

- b) **Que ese daño sea imputable, por acción u omisión, a una autoridad pública:** como bien lo mencione con anterioridad, quedara algún manto de duda señor juez que este daño es imputable al ICBF, será que no queda claro que el actuar del ICBF para este caso concreto fue totalmente negligente, omisivo, y dilatorio, vulnerando todos los derechos del menor y de su familia.
- c) **Que ese daño sea antijurídico:** pese a que este caso es algo especial y que no hay registros de casos similares, es obvio que se trata de un daño antijurídico, que no está ni se encuentra en el deber de soportar el menor de edad y su familia, pues si bien el Estado le ha conferido unas facultades especiales al ICBF que ejerce a través de sus agentes sean estos los defensores de Familia, el Estado y la misma ley ha establecido unos límites para el ejercicio de esas funciones y no es aceptable que se transgreda la ley de esa manera tan flagrante, incurriendo con ello en fallas del servicio que conllevan a vulneración de derechos de terceros.

Claro que es un daño antijurídico que un niño sea privado de estar con su familia de manera innecesaria por espacio de ocho años y ochos meses veinte días, máxime cuando hay unos familiares implorando para que ese niño regrese a ese hogar, ese daño antijurídico ocasiona en ese niño una serie de secuelas presentes y futuras que serán muy determinantes en la personalidad y el comportamiento de ese niño en la sociedad.

Es que haciendo un comparativo de la falla del servicio en la administración de justicia para la privación injusta de la libertad, si bien el ciudadano administrado está en el deber de soportar la carga de la administración de justicia y de ser sometido a un proceso y de ser privado de la libertad en beneficio del interés general sobre su propio derecho a la libertad, eso no significa que un juicio y la privación de la libertad se prolongue en el tiempo de manera indefinida sin que se le resuelva su situación jurídica.

En este caso si bien el Estado en cabeza de ICBF tiene la facultad de realizar la investigación administrativa a fin de determinar la situación o no de abandono y vulnerabilidad de un menor, razón por la cual puede optar por la ubicación en un hogar de paso, ello no significa que esa medida que en principio debe ser transitoria, se prolongue de manera injustificada en el tiempo, máxime si hay certeza de la existencia e interés de la familia extensa de hacerse responsable de los cuidados que el menor requiere; es que ni siquiera para los casos donde se llega a la conclusión de declarar al menor en estado de adaptabilidad, pues no es lógico que un menor que llega a ICBF de meses de nacido apenas a los 9 años se le resuelva que debe ser dado en adopción, con lo que se le ha privado de la posibilidad de acceder a una familia desde los primeros meses de nacido y de crecer en un hogar constituido.

Que decir entonces repito de la prolongada permanencia de un menor por el cual su familia en cabeza de la abuela materna manifestó el claro interés de protegerlo desde un comienzo, que justificación tiene que haya sido necesario que un juez de la Republica le diga vea señor Defensor toda la cantidad de errores que ha cometido en este trámite, y que pese a existir la orden del juez, este defensor haga caso omiso de la misma, constituyendo en fraude a orden judicial, y se dé la necesidad de que esta pobre señora a quien ya se le ha causado bastante perjuicio deba contratar los servicios de abogado para que a través de su asesoría se obtenga que se cumpla la orden del juez de familia y le entreguen en debida forma el nieto.

Para fundamentar las pretensiones de la demanda en relación con los perjuicios de orden moral y al daño en la vida en relación o perjuicios fisiológicos me permito aportar lo siguiente:

QUE ES EL DAÑO?

*"El daño, en "su sentido natural y obvio", es un hecho consistente en el "detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia causado a alguien", "en su persona, bienes, libertad, honor, afectos, creencias, etc..." y "supone la destrucción o disminución de ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de que goza un individuo" (Sentencia de enero 27 de 2000. Expediente **10867**. Actor: Juan Carlos González y otros. Consejero ponente doctor Alíer Hernández Enríquez)*

CONDICIONES DE LA EXISTENCIA DEL DAÑO.

Personal, directo y cierto (o actual).

PERSONAL:

Porque se configura por la violación de los derechos subjetivos de la persona damnificada. No importa que esa violación provenga de un hecho que afecte en forma INMEDIATA A UNA PERSONA, o bien, que sea la repercusión de un daño sufrido por un sujeto y que, en virtud de la relación que este DAMNIFICADO DIRECTO TENGA CON OTRA PERSONA (*relación tenida en cuenta por el derecho*) se traduzca en una conculcación mediata de la esfera jurídica así ligada. En ambos supuestos el daño es **PERSONAL** por cuanto el damnificado **ha sufrido un detrimento o perturbación desfavorable en su propia esfera jurídica**, SEA O NO LA VÍCTIMA INMEDIATA DEL HECHO DAÑOSO.

Conforme con lo anterior, el agravio sufrido por la VÍCTIMA INMEDIATA, contrasta con el **daño reflejo** que es el menoscabo soportado por otra persona distinta del damnificado inmediato. El daño patrimonial y moral que se ocasiona a los parientes de la víctima, constituye el típico ejemplo de daño reflejo.

En alguna jurisprudencia se habla de víctima directa y víctima indirecta, que es aquella que recibe el daño por reflejo. Ver Sentencia de 13 de septiembre de 2001. Expediente **13326**. Actor: Guillermo León Zapata y otros. Consejera Ponente Doctora María Elena Giraldo Gómez.

DIRECTO:

EL PERJUICIO INVOCADO POR LA VÍCTIMA TIENE QUE PROVENIR DEL DAÑO CAUSADO.

Dicho de otra manera: El carácter directo del daño supone el nexo de causalidad entre el daño (*alteración material exterior*) y el perjuicio (*consecuencias de dicha alteración sobre un patrimonio*). Hay que establecer que el perjuicio, entendido como la secuela del daño, sólo se repara si proviene de éste.

CIERTO:

Afirmar que el daño debe ser **cierto**, es lo mismo, en realidad, que expresar que el daño **debe existir** para que origine el derecho a obtener un resarcimiento.

Dicho de otro modo: Es el que se ha producido; es el perjuicio real sufrido por la víctima, es el que existe. Y es indiferente que sea pasado o futuro, pues el problema será siempre el mismo: probar la certeza del perjuicio demostrando que ya se produjo (*actual o consolidado*) o que **"aparezca como la prolongación cierta y directa de un estado de cosas actual"** o **"cuando es la prolongación de un perjuicio actual"** (*futuro o no consolidado*). El daño futuro sólo es indemnizable si se sabe con certeza que va a ocurrir.

EL PERJUICIO

TIPOLOGÍA DEL PERJUICIO

Es una clasificación de los distintos perjuicios reconocidos por la jurisprudencia.

Se han denominado por la doctrina **perjuicios de orden material y perjuicios de orden no material**.

1. PERJUICIOS DE ORDEN MATERIAL

Son aquellos que atentan contra bienes o intereses de naturaleza económica, es decir, valorables pecuniariamente. Son los que afectan el patrimonio económico de la víctima.

Son de dos clases:

- 1.1. **Daño emergente – damnum emergens: (egreso patrimonial, desembolso).** *"Hay daño emergente cuando un bien económico (dinero, cosas, servicios) salió o saldrá del patrimonio de la víctima.."* (Tamayo Jaramillo De la responsabilidad civil T. 2 pag.117) Es una disminución efectiva del patrimonio.

La utilización del verbo rector contenido en el texto transcrito, en el tiempo futuro "saldrá", permite sustentar la posibilidad de indemnizar el daño emergente futuro, que es el que se proyecta con posterioridad al hecho dañoso.

- 1.2. **Lucro cesante – lucrum cessans - : (falta de ingreso, no embolso)** *"...por el contrario, hay lucro cesante cuando un bien económico que debía ingresar en el curso normal de los acontecimientos, no ingresó ni ingresará en el patrimonio de la víctima"* (Ob. Cit.). Es el beneficio o beneficios que dejan de obtenerse.

2. PERJUICIOS INMATERIALES

- 2.1. No tienen una naturaleza económica, en el sentido de que, por definición, no se les puede medir en dinero. La indemnización que se decreta con el otorgamiento de una suma de dinero frente a un perjuicio moral, no busca "el pago de las lágrimas" (*"las lágrimas no se monedean"*), ni del dolor producido por el hecho dañoso.

Hay que entender que esta indemnización tiene un carácter **compensatorio** en el sentido de que mediante la equivalencia en dinero se otorga a la víctima o a los demandantes un bien que le ayuda a aliviar su pena, a mitigarla. No se trata de que quede materialmente indemne, sino que tenga una suma de dinero que le haga más llevadera la pena y pueda sufrir en mejores condiciones la alteración emocional que le produjo la tragedia.

2.1. PERJUICIO MORAL SUBJETIVO:

Es el daño ocasionado en el ámbito afectivo o sentimental de la persona, lo que trae como consecuencia dolor, sufrimiento, perturbación espiritual. Compromete básicamente la esfera afectiva o sentimental de la persona ocasionándole una perturbación, un dolor, un sufrimiento, que carece de sustento patológico. Lesiona al ser humano en sí mismo, sus efectos recaen sobre el ser humano en sí mismo, considerado como sujeto de derecho.

Es el que afecta el patrimonio emocional y afectivo de la víctima. Es la angustia, el dolor, la tristeza, el malestar, el sufrimiento que se experimenta por el impacto emocional del daño. Es la lesión que se padece en los sentimientos y los afectos. Se le ha llamado **perjuicio moral subjetivo o pretium doloris**, precio del dolor, como lo llamaron los romanos. También se le denomina "dolor de afección".

Por las características anotadas este perjuicio se liquida con la filosofía de proporcionar una **compensación** a los demandantes, ante la dificultad de reparar el daño causado.

Así se dijo claramente en una sentencia reciente:

*"En relación con el perjuicio moral ha reiterado la Sala que la indemnización que se reconoce a quienes sufran un daño antijurídico tiene una función básicamente satisfactoria¹ y no reparatoria del daño causado y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor, por lo tanto, corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta la gravedad del daño causado al demandante. La magnitud del dolor puede ser apreciada por sus manifestaciones externas y por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba². (Sentencia de abril 20 de 2005. Expediente **15247**. Actor: Javier Rojas Rivero y otros. Consejera ponente doctora Ruth Stella Correa Palacio –conscriptos) (Subrayas fuera de texto)*

En la obra "Responsabilidad Extracontractual del Estado" de Álvaro Bustamante Ledesma, sobre este tema, se lee:

"Estos perjuicios difieren sustancialmente de los materiales tanto por la naturaleza misma de los bienes afectados como por la posibilidad de su estimación económica. Los daños morales se localizan en la zona de mayor intimidad de la víctima, de los sentimientos, los afectos y el dolor en tal forma que sólo quien los padece puede determinar su verdad e intensidad, pues al no manifestarse exteriormente en una modificación del entorno material no son mensurables objetivamente. Si los daños morales únicamente producen efectos en el alma de quien los sufre su justiprecio no es factible y cualquier que se intente resulta inexacto (...) corresponde específicamente al dolor íntimo, las angustias, los padecimientos que afectan los sentimientos de una persona. Esta

clase de daño es la que se ubica en lo más íntimo del ser humano donde se queda sin manifestarse en el mundo exterior y esa circunstancia lo hace inasible, inmedible o determinable" (Pág. 233)

Cuantificar el dolor, las consecuencias psicológicas, personales o individuales, la tristeza, las angustias o trastornos emocionales que la pérdida de un ser querido, por ejemplo, ocasionan, no es tarea fácil. No existen parámetros o elementos que permitan una cuantificación

¹ RENATO SCOGNAMIGLIO. *El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual*. traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962, pág. 46.

² Ver, por ejemplo, sentencia de 2 de junio de 2004, exp: 14.950.



adecuada y justa, por lo cual la jurisprudencia ha establecido unos montos que apuntan a "compensar" el dolor experimentado, los cuales son determinados por el Juez en ejercicio de su arbitrio judicial.

Estos montos o parámetros, bien conocidos y reiterados en múltiples pronunciamientos del Consejo de Estado se han establecido en el equivalente a 1.000 gr. de oro para la víctima (cuando sea procedente) y para los miembros de su núcleo familiar (cónyuge, padre, hijos, y en algunos casos abuelos), y 500 gr. del mismo metal para los hermanos.

El fundamento de esta cuantificación radica en un precepto del Código Penal de 1936, el artículo 95, que establecía:

*"Cuando no fuere fácil o posible avaluar pecuniariamente el daño moral ocasionado por el delito, podrá fijar el juez **prudencialmente** la indemnización que le corresponda al ofendido, hasta la suma de dos mil pesos".*

Y este monto era el precio de 1.000 gr. de oro en ese momento histórico.

*El patrón de los gramos oro para efectos de cuantificar el perjuicio moral subjetivo se cambió para fijar el **quantum** de las condenas por este concepto en moneda legal colombiana, de acuerdo con el artículo 178 del C.C.A. Y al considerar que el **salario mínimo mensual** en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral debe fijarse con base en el valor del salario mínimo legal.*

RESPONSABILIDAD POR RIESGO EXCEPCIONAL.

(En sentencia de 18 de octubre de 2000. Exp. 13288 Actor: Luis Felipe Castañeda. Consejero Ponente Ricardo Hoyos Duque se resumió la sentencia de José M. Gutiérrez Sepúlveda, así:

".... el reconocimiento de este perjuicio no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones a nivel orgánico, sino que debe extenderse a todas aquellas situaciones que alteran la vida de relación de las personas; tampoco debe limitarse su reconocimiento a la víctima, toda vez que el mismo puede ser sufrido además por las personas cercanas a ésta, como su cónyuge y sus hijos; ni debe restringirse a la imposibilidad de gozar de los placeres de la vida, pues puede referirse además al esfuerzo excesivo de realizar actividades rutinarias; ni se trata sólo de la afectación sufrida por la persona en su relación con las demás, sino también con las cosas del mundo).

Luego de citar la sentencia de John Jairo Meneses Mejía y otros y la de septiembre 25 de 1977 María Edelmira Cano y otro, dijo:

*"Debe insistirse ahora, entonces, con mayor énfasis, en que el daño extrapatrimonial denominado en los fallos mencionados "daño a la vida de relación" corresponde a un concepto mucho más comprensivo, por lo cual resulta ciertamente inadecuado el uso de la expresión perjuicio fisiológico que, en realidad, no podía ser sinónima de aquella, ni siquiera en los casos en que este daño extrapatrimonial –distinto del moral– es consecuencia de una lesión física o corporal. Por esta razón **debe la Sala desechar definitivamente su utilización**. En efecto, el perjuicio aludido no consiste en la lesión en sí misma, **sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de relación de quien la sufre.***



De otra parte, se precisa que una afectación de tal naturaleza puede surgir **de diferentes hechos y no exclusivamente como consecuencia de una lesión corporal**. De otra manera, el concepto resultaría **limitado** y, por lo tanto, **insuficiente**, dado que como lo advierte el Profesor Felipe Navia Arroyo, únicamente permitiría considerar el perjuicio sufrido **por la lesión a uno solo de los derechos de la personalidad, LA INTEGRIDAD FÍSICA**. Así, aquella afectación puede tener causa **en cualquier hecho con virtualidad de provocar una alteración a la vida de relación de las personas, como una acusación calumniosa o injuriosa, la discusión del derecho al uso del propio nombre o la utilización de éste por otra persona** (situaciones a las que alude el Decreto 1260 de 1970), **o un sufrimiento muy intenso** (daño moral) **que, dada su gravedad, modifique el comportamiento social de quien lo padece, como podría suceder en aquellos casos en que la muerte de un ser querido afecta profundamente la vida familiar y social de una persona**. Y no se descarta, por lo demás, la posibilidad de que el perjuicio a la vida de relación provenga de una afectación al patrimonio, como podría ocurrir en aquellos eventos en que la pérdida económica es tan grande que –al margen del perjuicio material que en sí misma implica- produce una alteración importante de las posibilidades vitales de las personas.

Debe decirse, además, que **este perjuicio extrapatrimonial puede ser sufrido por la víctima directa del daño O POR OTRAS PERSONAS CERCANAS A ELLAS, POR RAZONES DE PARENTESCO O AMISTAD, ENTRE OTRAS**. Así, en muchos casos, parecerá indudable la afectación que –además del perjuicio patrimonial y moral- puedan sufrir la esposa y los hijos de una persona, **en su vida de relación**, cuando ésta muere. Así sucederá, por ejemplo, cuando aquellos pierden la oportunidad de continuar gozando de la protección, el apoyo o las enseñanzas ofrecidas por su padre o compañero, o cuando su cercanía a éste les facilitaba, dadas sus especiales condiciones profesionales o de otra índole el acceso a ciertos círculos sociales y el establecimiento de determinadas relaciones provechosas que, en su ausencia, resultan imposibles.

Quiero además traer a colación unas jurisprudencias proferidas por el Honorable Consejo de Estado en casos donde ha sido condenada la responsabilidad patrimonial del ICBF, donde se ha clarificado temas relacionados con el régimen de responsabilidad, con los perjuicios de orden moral, del pago de perjuicios a los familiares y de la prueba para tener derecho a ello.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, exp. 17042, Consejero Ponente doctor Enrique Gil Botero.

Responsabilidad Objetiva por daño especial – Régimen Aplicable.

Esta misma subsección dejó sentado que "...el régimen de responsabilidad llamado a regular situaciones de este matiz es el objetivo, como quiera que la administración pública no puede exonerarse con la sola acreditación de un comportamiento diligente y cuidadoso. En efecto, en supuestos de esta especificidad existen dos circunstancias que hacen aplicable el título objetivo de responsabilidad de daño especial: i) la naturaleza, rango y especial protección que recae sobre los derechos de los niños y niñas del país y ii) la finalidad y objetivos propios del servicio público esencial de bienestar familiar".

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de mayo de 2011, exp. 36912, Consejero Ponente doctor Enrique Gil Botero.

**REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO - Prueba de parentesco por consanguinidad /
PARENTENSCO POR CONSANGUINIDAD - Prueba. Registro civil de nacimiento**

De conformidad con lo anterior, se tiene que está debidamente establecido el parentesco existente entre el señor Nelson Méndez Rodríguez (occiso) y los demandantes a quienes al a quo reconoció perjuicios morales: cónyuge supérstite e hijo del primero. Ello al tenor de los artículos 1, 54, 101, 105, 112 y 115 del Decreto 1260 de 1970, que señalan que cuando se expide un certificado de registro civil de nacimiento y en él consten los nombres de los progenitores del inscrito, dicho documento constituirá prueba suficiente para acreditar el parentesco de consanguinidad existente entre éste y aquéllos. En efecto, si tales nombres fueron indicados en el correspondiente certificado, es porque el inscrito nació dentro de un matrimonio legalmente celebrado o, siendo hijo extramatrimonial, fue reconocido por su padre o se declaró judicialmente su paternidad y, no puede el juez exigir pruebas adicionales para establecer el parentesco, so pena de desconocer la solemnidad prevista por la ley, de manera excepcional, para la demostración de los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 105 del Decreto 1260 de 1970. Nota de Relatoria: Ver sentencia de septiembre 21 de 2000, Exp. 11766, C.P. Alier Hernández.

DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA Y A LA VIDA - Sujetos de protección reforzada constitucional. Niños y niñas / PRINCIPIO DE PROTECCION CONSTITUCIONAL REFORZADA - Niños y niñas son especiales sujetos de protección constitucional / PRINCIPIO DE INTERES SUPERIOR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS - Aplicación / PRINCIPIO DE PROTECCION ESPECIAL A LA INTEGRIDAD FISICA - Aplicación. Niños y niñas / DEBER DE PROTECCION ESPECIAL - Niños y niñas. Obligación del estado / PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD - Titularidad de protección de los derechos de los niños y niñas por cuenta de la familia, la sociedad y el Estado

En relación con la protección de la infancia, la niñez y la adolescencia, la Constitución Política estableció diversos principios, derechos y garantías fundamentales que se traducen en los siguientes postulados: i) el principio de protección constitucional reforzada contenido en el inciso tercero del artículo 13 superior; ii) el principio de interés superior de los niños y niñas y de prevalencia de los derechos de éstos sobre los derechos de los demás (inciso final artículo 44 C.P.); iii) la protección especial a los derechos a la integridad física, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación equilibrada, al nombre, a la nacionalidad, a tener una familia y no ser separado de ella, al cuidado y el amor, a la educación y a la cultura, a la recreación y a la libre expresión de su opinión; iii) el deber en cabeza del Estado de protección especial contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos, y iv) la titularidad de protección de los derechos de los niños y niñas del país por parte de la familia, la sociedad y el Estado.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 44 / LEY 12 DE 1991 / CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS

NOTA DE RELATORIA: Sobre este tema ver Corte Constitucional, sentencia T 1226 del 23 de febrero de 2006

PERJUICIOS MORALES - A favor de padres, abuelos y hermano por muerte de niña, menor, en hogar comunitario

PERJUICIOS MORALES - Prueba indiciaria / PRUEBA INDICIARIA - Perjuicios morales / DAMNIFICADO - Legitimación en la causa. Acción de reparación directa

Y una vez establecido el parentesco, a partir de su plena prueba -registro civil de nacimiento en copia auténtica- se puede inferir que los parientes más próximos del

señor -cónyuge supérstite e hijo- padecieron pena, aflicción o congoja con la muerte violenta del esposo y padre, con lo cual se los tiene como damnificados por tal suceso. Es decir, a partir de un hecho indirecto debidamente probado llamado "indicador", que en este caso es el parentesco, se infiere o deduce indiciariamente a través del razonamiento lógico, un hecho indirecto llamado "indicado" que, corresponde al sufrimiento y tristeza padecidos por los parientes más próximos del señor Méndez, a raíz de su muerte. Nota de Relatoría: Ver sentencia de mayo 11 de 2006, Exp. 14694, C.P. Ramiro Saavedra; sentencia de febrero 16 de 2001, Exp. 12703, C.P. María Elena Giraldo; sentencia de abril 26 de 2006, Exp. 14908, C.P. Ruth Stella Correa.

PERJUICIOS MORALES - A favor de padres, abuelos y hermano por muerte de niña, menor, en hogar comunitario

En el caso que hoy ocupa a la Sala, según lo ya expresado, puede inferirse fácilmente que el daño moral sufrido por los familiares de la menor Natalia Sandoval Martínez fue de gran intensidad, en atención a las circunstancias en que se produjo la muerte de la referida menor y que quedaron establecidas en esta sentencia, razón por la cual se impone acceder al reconocimiento de una indemnización equivalente al valor de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta providencia -como se solicita en la apelación-, a favor de los padres de la víctima directa, suma que de forma reiterada ha reconocido la jurisprudencia de esta Corporación en los eventos en que el perjuicio moral se presenta en su mayor intensidad; de igual forma y con fundamento en ese mismo criterio jurisprudencial, se reconocerá el valor equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de los abuelos y hermano de la referida víctima directa. (...) debe advertirse que obran en original y copia auténtica los respectivos registros civiles nacimiento y matrimonio de los demandantes, los cuales dan cuenta de la relación de parentesco existente entre la menor Natalia Sandoval Martínez y quienes acudieron al proceso en calidad de sus padres, abuelos y hermano. Así las cosas, habrá lugar a reconocer, a título de daño moral, las sumas de dinero establecidas a continuación, para cada uno de los demandantes.

MEDIDAS DE REPARACION INTEGRAL - Medida no pecuniaria de publicación y difusión del contenido de la sentencia. Orden al ICBF, Instituto de Bienestar Familiar / **MEDIDA NO PECUNIARIA** - Publicación y difusión del contenido de la sentencia. Condena al ICBF

En el caso concreto, la Sala advierte que se transgredió tanto la dimensión objetiva como subjetiva del derecho a la vida y a la integridad de la menor Natalia Sandoval Martínez, toda vez que el comportamiento del ICBF fue negligente y descuidado para con el cuidado y protección que estaba en la obligación de brindarle; en efecto, según quedó establecido, la menor sufrió un trauma craneoencefálico que le produjo la muerte, mientras se encontraba bajo el cuidado de un hogar comunitario, lo cual también significó el desconocimiento de la protección constitucional especial y reforzada que cobija a los niños y niñas de país. Por lo tanto, con fundamento en el principio de reparación integral (art. 16 Ley 446 de 1998), la Sala decretará las siguientes medidas, con miras a restablecer la dimensión objetiva del núcleo de los derechos fundamentales transgredidos: (...) Como medida de no repetición, el Director o Directora General a nivel nacional del ICBF remitirá a todos los Centros Regionales de esa entidad en el país, copia íntegra de esta providencia para que sea difundida entre las Asociaciones de Padres de Hogares de Bienestar. (...) De igual forma, el ICBF establecerá un link con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. La entidad demandada, en el término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo vínculo durante un periodo de 6 meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esa institución. (...) La entidad demandada deberá enviar un informe de cumplimiento de la orden anterior, con destino

a la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de este fallo.

MEDIDAS DE REPARACION INTEGRAL - Noción / MEDIDAS DE JUSTICIA RESTAURATIVA -
Restablecimiento del núcleo del derecho o interés constitucionalmente protegido

El daño antijurídico considerado como lesión de un derecho, bien o interés legítimo, supone la alteración o afectación de un estado de cosas que impacta de manera negativa la esfera interna y externa de la persona que lo padece y, por consiguiente, no sólo comprende la órbita patrimonial. (...). De igual forma, los derechos fundamentales trascienden la esfera individual y subjetiva, pues se ha reconocido que también contienen un plano axiológico u objetivo que está dirigido o encaminado a impedir que transgresiones a éstos se vuelvan a producir, razón por la cual es preciso disponer medidas adicionales de protección dirigidas a mejorar la prestación del servicio estatal respectivo. La jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha discurrido sobre el particular (...). En consecuencia, cuando el juez de lo contencioso administrativo aprecia la vulneración grave de la dimensión objetiva de un derecho, puede adoptar medidas de justicia restaurativa a efectos de que sea restablecido el núcleo del derecho o interés constitucionalmente protegido, al margen de que el trámite procesal sea el del grado jurisdiccional de consulta o la resolución de un recurso de apelación único. Lo anterior, toda vez que el principio de la no reformatio in pejus, como expresión de la garantía del derecho al debido proceso sólo tiene restricción en la órbita indemnizatoria del principio de reparación integral. En efecto, la jurisprudencia de la Corporación ha precisado que si existe una colisión entre el principio de reparación integral con los principios de congruencia procesal y de jurisdicción rogada, estos últimos deben ceder frente al primero en cuanto concierne a las medidas de satisfacción, rehabilitación, y garantías de no repetición, toda vez que el parámetro indemnizatorio, esto es, el reconocimiento de los perjuicios materiales e inmateriales si está amparado por los citados principios del proceso que tienden a garantizar el derecho de defensa del demandado.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente, doctor Hernán Andrade Rincón, sentencia del 13 de noviembre de 2013, radicación número: 25000-23-26-000-2001-00298-01(29533), Actor: Elda Martínez y Otros, Demandado: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Perjuicios morales – reconocimiento a hermanos menores.

El hecho de que los menores al momento de los hechos no estuvieran en condiciones de dimensionar el acontecimiento trágico vivido por su familia, no significa que no hayan sufrido, ya que según las teorías psicológicas actuales, los menores desde la primera etapa de su vida perciben el mundo a través de su relación con los padres y por tanto, recibieron de ellos la congoja padecida por la pérdida de su hijo y también la perturbación emocional que implicó la pérdida de un hijo para el núcleo familiar. (...) en relación con el monto reconocido, se recuerda que este pertenece al arbitrio judicial y considera la sala que fueron adecuadamente tasados por el fallador de primera instancia y se ajustan a los criterios establecidos en la materia, razón suficiente para confirmar lo decidido.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejera Ponente doctora Olga Melida Valle de la Hoz, 5 de julio de 2012, radicación 05001-23-31-000-1997-01942-01 (23643) Actor. Rodrigo Antonio Arboleda Martínez y otros. Demandado ICBF.

"En el asunto sub examine la madre comunitaria no obstante carecer de vínculo laboral alguno con la entidad demandada si presta a nombre una función pública a favor de la niñez de escasos recursos, desarrolla en su representación los objetivos que por ley se le han asignado a dicho ente. Por ende sus acciones o sus omisiones son responsabilidad del instituto."

Consejo de estado, sección tercera, sentencia del 28 de septiembre de 1998, rad. 11130 M.P. Alíer Eduardo Hernández Enríquez.

V. COMPETENCIA

Conforme con lo establecido en el Título IV, Capítulo III, artículos 155 numeral 6, 156 numeral 6 y 157 del Código de procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo ley 1437 de 2011, Es competente en primera instancia para conocer de este proceso el Juez Administrativo del Circuito judicial de Guadalajara de Buga, por la naturaleza de la acción, por el lugar donde ocurrieron los hechos, por la cuantía de las pretensiones, y dado que los perjuicios de orden material no superan los diez millones de pesos y la mayor parte de los por perjuicios son de orden moral, es usted señor juez competente para conocer del presente proceso en primera instancia.

VI. ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTIA

Estimo las razones de la cuantía de las pretensiones en la suma de **setecientos setenta y seis millones doscientos tres mil doscientos pesos (\$776.203.200.00) equivalentes a mil doscientos cuatro SMLMV 2015.**

Para establecer la cuantía de la demanda a la fecha de presentación de la misma conforme con el artículo 157 del Código de procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo ley 1437 de 2011, me permito presentar la liquidación de las pretensiones al momento de presentar la demanda, aclarando que la mayor parte de las pretensiones son de orden moral, y la suma de los perjuicios materiales es solo de tres millones de pesos (\$3.000.000)

6.1. Abuela **MARÍA GLADIS OSPINA VILLADA.**

1. Por perjuicios materiales:

1.1. Daño emergente.

- a) Pago de honorarios profesionales, los cuales fueron cubiertos por la señora María Gladis Ospina Villada.

\$3.000.000

1.2. Por perjuicios morales:

1.2.1. Subjetivos.

Sesenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos pesos (\$64.433.600) equivalentes a CIENTO SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del año 2015.

1.2.2. Por perjuicios fisiológicos (daño a la vida en relación o alteración de las condiciones de existencia).

Sesenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos pesos (\$64.433.600) equivalentes a CIENTO SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del año 2015.

Resumen de los perjuicios a favor de la señora María Gladis Ospina Villada

Materiales.

\$3.00.000.00

Morales

\$128.867.200.00

Total indemnización respecto de la señora María Gladis Ospina Villada, abuela del menor.

\$131.867.200 CIENTO TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS.

6.2. Menor JORGE ELIECER IDARRAGA GONZALEZ.

1. Por perjuicios morales:

1.1. Subjetivos.

Sesenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos pesos (\$64.433.600) equivalentes a CIENTO SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del año 2015.

1.2. Por perjuicios fisiológicos (daño a la vida en relación o alteración de las condiciones de existencia).

Sesenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos pesos (\$64.433.600) equivalentes a CIENTO SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del año 2015.

Total indemnización respecto del menor Jorge Eliecer Idarraga González.

\$128.867.200 CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS.

6.3. Menor JHON EDWIN GONZALEZ OSPINA. (Hermano)

1. Perjuicios morales.

1.1. Subjetivos.

Sesenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos pesos (\$64.433.600) equivalentes a CIENTO SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del año 2015.

1.2. Por perjuicios fisiológicos (daño a la vida en relación o alteración de las condiciones de existencia).

Sesenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos pesos (\$64.433.600) equivalentes a CIENTO SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del año 2015.

Total indemnización respecto del menor Jhon Edwin González Ospina.

\$128.867.200 CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS.

6.4. Menor MÓNICA ALEJANDRA ARENAS GONZÁLEZ. (hermana)

1. Por perjuicios morales.

1.1. Subjetivos.

Sesenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos pesos (\$64.433.600) equivalentes a CIENTO SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del año 2015.

1.2. Por perjuicios fisiológicos (daño a la vida en relación o alteración de las condiciones de existencia).

Sesenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos pesos (\$64.433.600) equivalentes a CIENTO SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del año 2015.

Total indemnización respecto de la menor Mónica Alejandra Arenas González.

\$128.867.200 CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS.

6.5. Señora YURI TATIANA OSPINA VILLADA (tía)

1. Por perjuicios morales.

1.1. Subjetivos.

Sesenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos pesos (\$64.433.600) equivalentes a CIENTO SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del año 2015.

Total indemnización respecto de Yuri Tatiana Ospina Villada.

\$64.433.600 SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS.

6.6. Señor JUAN SEBASTIAN OSPINA VILLADA (tío)

1. Por perjuicios morales.

1.1. Subjetivos.

Sesenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos pesos (\$64.433.600) equivalentes a CIEN SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del año 2015.

Total indemnización respecto de Yuri Tatiana Ospina Villada.

\$64.433.600 SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS.

6.7. Señora SANDRA PATRICIA MARIN OSPINA (tía)

1. Por perjuicios morales.

1.1. Subjetivos.

Sesenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos pesos (\$64.433.600) equivalentes a CIEN SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del año 2015.

Total indemnización respecto de Yuri Tatiana Ospina Villada.

\$64.433.600 SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS.

6.8. Señor CARLOS ARTURO OSPINA VILLADA (tío abuelo)

1. Por perjuicios morales.

1.1. Subjetivos.

Sesenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos pesos (\$64.433.600) equivalentes a CIEN SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES del año 2015.

Total indemnización respecto de Yuri Tatiana Ospina Villada.

\$64.433.600 SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS.

La sumatoria total de las pretensiones es setecientos setenta y seis millones doscientos tres mil doscientos pesos (\$776.203.200.00) equivalentes a mil doscientos cuatro SMLMV 2015.

VII. PRUEBAS:

Además de los documentos relacionados en el capítulo de Anexos, solicito señor juez se decreten, practiquen y tengan como tales, las siguientes:

7.1. Documentales: Allogo las siguientes pruebas documentales:



ÍTEM	DETALLE	CALIDAD *	FIs
7.1.1	Poder conferido por la señora Maria Gladis Ospina Villada con presentación en notaria, quien actúa en nombre propio y en representación de sus nietos Jorge Eliecer, Jhon Edwin y Mónica Alejandra.	1	1
7.1.2	Poder conferido con presentación en Notaria de los señores Yuri Tatiana Ospina Villada, Juan Sebastián Ospina Villada y Sandra Patricia Marion Ospina.	1	1
7.1.3	Fotocopia simple de cédula de la señora María Gladis Ospina Villada.	3	1
7.1.4	Copia autentica de registro civil de nacimiento de la señora Ninfa Tiberia González Ospina.	2	1
7.1.5	Fotocopia simple de cédula de ciudadanía de Ninfa Tiberia González Ospina.	3	1
7.1.6	Fotocopia autentica de registro civil de nacimiento de Jorge Eliecer Idarraga González	2	1
7.1.7	Fotocopia de la tarjeta de identidad de Jorge Eliecer Idarraga González	3	1
7.1.8	Copia autentica del registro civil de nacimiento de Mónica Alejandra Arenas González	2	1
7.1.9	Fotocopia de la tarjeta de identidad de Mónica Alejandra Arenas González	3	1
7.1.10	Copia autentica del registro civil de nacimiento de Jhon Edwin González Ospina	2	1
7.1.11	Fotocopia de la tarjeta de identidad de Jhon Edwin González Ospina	3	1
7.1.12	Resolución No. 0021-2009 del 8 de junio de 2009 por medio del cual el defensor de familia de Tuluá le concede la custodia y el cuidado personal de los menores Jhon Edwin González Ospina y Mónica Alejandra Arenas González a su abuela materna señora María Gladis Ospina Villada.	1	2
7.1.13	Constancia de notificación personal de la Resolución No. 0021-2009 del 8 de junio de 2009 por medio del cual el defensor de familia de Tuluá le concede la custodia y el cuidado personal de los menores Jhon Edwin González Ospina y Mónica Alejandra Arenas González a su abuela materna señora María Gladis Ospina Villada.	1	1
7.1.14	Copia autentica del edicto publicado por el defensor de Familia con relación a la resolución No. 0021-2009 del 8 de junio de 2009.	1	2
7.1.15	Fotocopia de cédula de Carlos Arturo Ospina Villada	3	1
7.1.16	Registro civil de nacimiento de Carlos Arturo Ospina Villada	2	1
7.1.17	Fotocopia de cédula de Yuri Tatiana Ospina Villada	3	1
7.1.18	Registro civil de nacimiento de Yuri Tatiana Ospina Villada	2	1
7.1.19	Fotocopia de cédula de Juan Sebastián Ospina Villada	3	1
7.1.20	Registro civil de nacimiento de Juan Sebastián Ospina Villada	2	1
7.1.21	Fotocopia de cédula de Sandra Patricia Marin Ospina	3	1
7.1.22	Registro civil de nacimiento de Sandra Patricia Marin Ospina	2	1
7.1.23	Valoración psicológica realizada por el doctor Hildebrando Cubillos a la señora María Gladis Ospina Villada.	1	4
7.1.24	Valoración psicológica realizada por el doctor Hildebrando Cubillos al menor Jorge Eliecer Idarraga González.	1	8
7.1.25	Valoración psicológica realizada por el doctor Hildebrando Cubillos al menor Mónica Alejandra Arenas González.	1	2
7.1.26	Valoración psicológica realizada por el doctor Hildebrando Cubillos al menor Jhon Edwin González Ospina	1	2
7.1.27	Valoración familiar realizada por el doctor Hildebrando Cubillos respecto del núcleo familiar del menor Jorge Eliecer Idarraga González.	1	1
7.1.28	Copia del expediente administrativo que reposa en el ICBF respecto del menor Jorge Eliecer Idarraga González	2	604
7.1.29	Oficio sin número y fecha 11 de junio de 2014, por medio del cual la doctora Mónica María Restrepo Santa hace entrega de las copias auténticas del proceso adelantado por el ICBF respecto del niño Jorge Eliecer Idarraga González.	1	1
7.1.30	Copia de la resolución No. 290 del 11 de junio de 2014 por medio del cual la doctora Mónica María Restrepo Santa Defensora de Familia del centro zonal Tuluá resuelve la entrega del menor Jorge Eliecer a su abuela materna y además le concede el cuidado y custodia del menor.	1	5
7.1.31	Acta de notificación de resolución No. 290 del 11 de junio de 2014	1	1
7.1.32	Acta de entrega del menor a su abuela	1	1
7.1.33	Oficio sin número por medio del cual el coordinador grupo de quejas del ICBF oficina de control interno disciplinario le contesta a la señora María Gladis respecto de una queja elevada por ella en relación con la actuación de los defensores de familia en su caso.	1	1
7.1.34	Memorial de escrito de acción de Tutela interpuesta por la señora María Gladis Ospina porque el ICBF pese a existir orden de un juez de familia no efectuaba acción alguna tendiente a cumplir con el fallo judicial.	3	24
7.1.35	Fallo de Tutela No. 169 proferido por el juzgado once administrativo de Cali, por el cual niega la acción de Tutela.	1	15
7.1.36	Oficio del 03 de febrero de 2014 por medio del cual la Secretaria de la Sección Segunda del tribunal contencioso administrativo del Valle informa que con ponencia del honorable magistrado doctor Jhon Erick Chávez Bravo se revocó el fallo No. 169 proferido por el juzgado once administrativo de Cali y se Tutelo los derechos fundamentales de la señora María Gladis Ospina Villada.	1	1
7.1.37	Oficio dirigido por el apoderado de la señora María Gladis con destino al director Regional del ICBF con relación al incumplimiento por parte de la defensora de familia de la orden del juez. (1 de abril de 2014)	1	2

7.1.38	Oficio dirigido por el apoderado de la señora María Gladis con destino a la defensora de familia doctora Leticia Viveros Obregón, con relación al incumplimiento por parte de ella de la orden impartida por el juez de familia. (1 de abril de 2014)	1	2
7.1.39	Oficio dirigido por el apoderado de la señora María Gladis con destino al juez once de familia con el fin de informarle el desacato a la orden judicial por parte de la doctora Leticia Viveros Obregón. (1 de abril de 2014)	1	2
7.1.40	Oficio de respuesta del 21 de abril de 2014 por el cual la doctora Leticia Viveros Obregón contesta la petición elevada por el apoderado judicial de la señora María Gladis.	1	1
7.1.41	Recibo de pago de honorarios profesionales cancelado al doctor Guillermo Polonia Zamora por la asistencia jurídica en la acción de Tutela en primera y segunda instancia y peticiones elevadas al ICBF	1	1
7.1.42	Registro civil de nacimiento de María Gladis Ospina Villada para acreditar parentesco con Carlos Arturo Ospina Villada	2	1
7.1.43	Memorial de solicitud de conciliación radicado ante la Procuraduría delegada para asuntos administrativos	3	14
7.1.44	Memorial de subsanación de solicitud de conciliación radicado ante la Procuraduría delegada para asuntos administrativos	2	9
7.1.45	Acta de audiencia No. 149 expedida por la doctora Alexandra Gómez Muñoz Procuradora 18 judicial II, de fecha 13 de abril de 2015.	1	1
7.1.46	Acta de audiencia No. 160 expedida por la doctora Alexandra Gómez Muñoz Procuradora 18 judicial II, de fecha 24 de abril de 2015.	1	2
7.1.47	Constancia de conciliación fracasada expedida por la doctora Alexandra Gómez Muñoz Procuradora 18 judicial II, de fecha 24 de abril de 2015.	1	1

* Calidad de los documentos: 1: Original; 2: Copia Auténtica; 3: Copia Simple

7.2. Testimoniales:

Solicito, recepcionar la declaración de los señores que más adelante citare, mayores de edad, con domicilio en la ciudad de Tuluá, para que depongan lo que les consta sobre los hechos de la demanda.

DIANA PATRICIA HOYOS, mayor y vecina de la ciudad de Tuluá, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.116.243.385 de Tuluá, quien puede ser citada a través mío y reside en el corregimiento de la Marina de la ciudad de Tuluá – Valle.

LUZ DARY OSPINA VILLADA mayor y vecina de la ciudad de Tuluá, identificada con la cédula de ciudadanía No. 38.795.387 expedida en Tuluá – Valle, quien puede ser citada a través mío, y reside en el corregimiento de la Marina de Tuluá.

SANDRA JANETH VALDERRAMA GONZALEZ, mayor y vecina de la ciudad de Tuluá, identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.720.116 expedida en Tuluá – Valle, quien puede ser citada a través mío y reside en el corregimiento de la Marina en Tuluá.

VIII. ANEXOS:

Además de las relacionadas en el acápite de Pruebas, anexo:

- Poder debidamente conferido con nota de presentación personal.
- Copia de la demanda y sus anexos para el traslado a la parte demandada.
- Copia de la demanda y sus anexos para el traslado a la agencia nacional de defensa jurídica del estado.
- Copia de la demanda y sus anexos para el traslado al ministerio público.
- Copia simple de la demanda para el archivo del despacho.
- CD con el archivo magnético de la demanda.

IX. NOTIFICACIONES:

Al Director General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, doctora Cristina Plazas Michelsen, representante Legal del ICBF, o quien hiciere sus veces, en la avenida carrera 68 No. 64C – 75 de la ciudad de Bogotá. Teléfono 4377630. Email. atencionalciudadano@icbf.gov.co.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle del Cauca, representado por el doctor Jhon Arbey Murillo Benítez, o quien hiciere sus veces, en la avenida 2 Norte No. 33 AN – 45 de la ciudad de Santiago de Cali. Teléfono 4882525. Email.

A los convocantes señora María Gladis Ospina Villada y otros. Pueden ser notificados a través mío, o en el corregimiento de la marina de la ciudad de Tuluá. Teléfono. 3168726696.

El suscrito apoderado de la parte convocante en mi Oficina distinguida con la dirección Carrera 26 no. 26 – 39 Ofi. 207 edificio los profesionales de la ciudad de Tuluá. Cel. 3175423394 – 3135966920. Email. william_aponte80@yahoo.es.

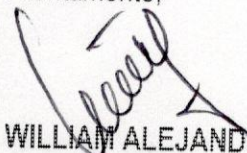
La agencia nacional de defensa jurídica del estado que tiene como directora a la doctora Adriana María Guillen Arango, recibe notificaciones en su sede ubicada en la calle 70 No. 4 – 60 de la ciudad de Bogotá D.C. Tel. 2558955.

Para los efectos del artículo 198 del CPACA Ley 1437 de 2011 notifíquese al señor agente del ministerio público en su respectiva oficina.

Señor juez por estar reunidos los requisitos del artículo 162 del CPACA le ruego sea admitida la presente demanda y se ordene correr los traslados de rigor.

Del señor Juez,

Atentamente,



WILLIAM ALEJANDRO APONTE LONDOÑO

C.C. No. 89.005.695 de Armenia – Quindío

T. P. No. 153.143 del C. S. de la J.